

A LA MESA DEL CONGRESO  
DE LOS DIPUTADOS

FERRAN BEL i ACCENSI, en su calidad de Diputado del PDeCAT, adscrito al Grupo Parlamentario Plural, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y s.s. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.

El apartado 3 de la Disposición Transitoria de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, establece:

“3. Transcurridos tres años de la entrada en vigor de esta Ley, la obligación de presentar el estado de información no financiera consolidado previsto en los apartados 49.5 b) del Código de Comercio y 262.5.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, será de aplicación a todas aquellas sociedades con más de 250 trabajadores que o bien tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, exceptuando a las entidades que tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas de acuerdo con la Directiva 34/2013, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos una de las circunstancias siguientes:

- 1.º Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.
- 2.º Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros.”

En este contexto:

- ¿Qué balance hace el Gobierno de la aplicación de la ley, en lo relativo a la divulgación de la información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa, una vez han transcurrido 3 años desde la aprobación de la norma?

Palacio del Congreso de los Diputados, a 12 de abril de 2021

  
Ferran Bel i Accensi  
Diputado del PDeCAT